



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

---

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte (2020)

<b>RADICADO:</b>	<b>11001-33-35-026-2019-00149-00</b>
<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
<b>DEMANDANTE:</b>	CARLOS ARTURO GUERRERO CAMACHO
<b>DEMANDADO:</b>	UGPP

Revisado el expediente de la referencia, se observa que dentro del mismo, ya se surtió el traslado de la excepción de falta de integración de litisconsorcio necesario y/o llamamiento en garantía, propuesta por la UGPP, del 6 al 8 de julio de 2020, según se observa a folio 245.

La parte activa guardó silencio frente al traslado.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 806 de 2020<sup>1</sup>, las excepciones previas deben resolverse siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 100, 101, 102 y 110 del Código General del Proceso.

Conforme a lo anterior procede el Despacho a resolver la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario, atendiendo a que ya se corrió traslado y se cuenta con las pruebas para poder emitir un pronunciamiento de fondo sobre las mismas.

### **Falta de integración del litisconsorcio necesario**

Señala la apoderada, que los pedimentos de la demanda se dirigen a que se incluyan los factores que la parte actora indica, los cuales tenían el carácter

---

<sup>1</sup> Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 11001-33-35-026-2019-00149 de salariales, pero que el INPEC, nunca reportó, por lo cual considera necesaria la comparecencia de dicha entidad al juicio, además, porque la misma ostentaba la condición de empleadora y la responsable de efectuar el pago de los aportes.

Afirma, que la calidad de la antigua empleadora, el reporte de pagos hechos al extrabajador y de los que pretende sean incluidos en el IBL de su pensión, se encuentran acreditados en el expediente administrativo allegado.

Señala, que es al INPEC, a quien le corresponde acreditar los pagos que pueden entenderse como factores salariales.

## CONSIDERACIONES

Dentro de las modalidades previstas en torno a la intervención de terceros, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableció en el artículo 225 la figura del llamamiento en garantía. Dicho enunciado normativo establece:

**“Artículo 225. Llamamiento en garantía.** Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

*El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.*

*El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:*

- 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.*
- 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.*
- 3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.*
- 4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales. (...)”*

Del análisis de la norma, se concluye, que antecede al llamamiento en garantía, la existencia de un vínculo legal o contractual, respecto de quien se dice debe concurrir como tercero, en la reparación del perjuicio o el reembolso total o parcial derivado de la condena que se imponga en la sentencia.

El Consejo de Estado, se ha ocupado de estudiar esta figura y en ese sentido ha consolidado las consecuencias jurídicas del llamado en garantía en los siguientes términos:

*“El llamamiento en garantía, como se ha manifestado en múltiples ocasiones, tiene ocurrencia cuando entre la parte o persona citada y la que hace el llamamiento existe una relación de orden legal o contractual, con el fin de que aquella pueda ser vinculada a las resultas del proceso para que en el caso en que efectivamente se declare la responsabilidad de la demandada, el juez decida sobre la relación sustancial existente entre el llamante y el llamado en garantía, cuestión que puede dar lugar a una de dos situaciones: a) concluir que el llamado en garantía no está obligado a responder, frente a lo cual se decidirá que no se le atribuye responsabilidad o b) concluir que le asiste razón al demandado frente a la obligación que tiene el llamado en garantía de reparar los perjuicios, caso en cual se debe determinar el alcance de su responsabilidad y el porcentaje de la condena que deberá restituir a la parte demandada con cargo a lo que ésta pague al demandante.”<sup>2</sup>*

Resulta relevante señalar que el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, asignándole como función y competencia especial, el reconocimiento de derechos económicos de los trabajadores, tales como pensiones, bonos pensionales, auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del régimen de prima media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación.

Es así que el accionante, solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, el reconocimiento, reliquidación y pago de la pensión de jubilación, teniendo como base todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios.

---

<sup>2</sup> CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, Auto del 17 de julio del 2013 radicado No 201873773001-23-31-000-201200327-0146626. MP MAURICIO FAJARDO GOMEZ.

La entidad estatal profirió decisiones administrativas de carácter definitivo, en virtud de las cuales, reconoce la pensión de jubilación y la reliquidación de la pensión, siendo importante resaltar que, en el marco del procedimiento administrativo, no se aduce obligación alguna respecto de la persona jurídica de la cual se pretende se efectuó el llamamiento en garantía.

Atendiendo la asignación de competencias, definida en la Ley, es preciso señalar que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, es la única entidad llamada a efectuar el reconocimiento y pago de la pensión, aplicando la normatividad vigente y liquidando la prestación en debida forma.

Es así, que el alcance del medio de control propuesto, es la reliquidación de la pensión de jubilación, y no, si la entidad nominadora, realizó las cotizaciones con destino al sistema de seguridad social; si bien, en principio, podría alegarse que existe una obligación de la entidad nominadora en realizar los descuentos en los demás factores salariales con destino a pensión como obligación consagrada en la ley, lo cierto es que el objeto de la Litis es otro, en donde, solo se discute la actuación administrativa adelantada ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

Dicha circunstancia puede ser ventilada dentro de otro proceso, pues en el fondo, la solicitud de llamamiento lo que entraña es una verdadera pretensión que debe ser valorada por la autoridad judicial o administrativa competente, pero no corresponde a este asunto dicha determinación.

De lo anterior, los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993, establecen lo siguiente:

**“ARTICULO. 24.-Acciones de cobro.** *Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.”*

**“ARTICULO. 57.-Cobro coactivo.** *De conformidad con el artículo [79](#) del Código Contencioso Administrativo y el artículo [112](#) de la Ley 6ª de 1992, las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus créditos.”*

De la misma manera, el artículo 2° del Decreto 2633 de 1994, que reglamentó las anteriores normas y regula el cobro por Jurisdicción Coactiva, manifiesta lo siguiente:

*“Artículo 2°.- Del procedimiento para constituir en mora al empleador. Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual presentará mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.”*

De acuerdo a lo anterior, es claro para este Despacho, que el legislador le dio las herramientas necesarias a las entidades de previsión social, para que mediante el ejercicio de la acción de cobro coactivo en sede judicial, puedan realizar las reclamaciones que consideren pertinentes, en este caso, en contra del INPEC.

Así lo manifestó el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca<sup>3</sup>, expresando lo siguiente:

*“En el caso bajo estudio, la UGPP expresó como fundamentos del llamamiento en garantía que la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, como empleadora de la señora MARIA HELENA AMAYA MOSQUERA, tiene la obligación de realizar los descuentos al Sistema General de Seguridad Social, motivo por el cual si la sentencia es condenatoria y ordena reliquidar la pensión de la parte actora con la inclusión de todos los factores salariales sobre los cuales la demandante no cotizó, es quien debe responder por dichos pagos.*

*Lo anterior como quiera que la obligación legal que funda el llamamiento en garantía dispone que el empleador será el responsable de los aportes y responderá por la totalidad de los aportes, aún en el evento que no haya efectuado el descuento al trabajador.*

*Se concluye lo anterior, que en este caso se llama en garantía a la entidad empleadora para que concurra al pago de aportes patrones, y eventualmente los que correspondan a la parte actora, en caso de que se determine que hubo una omisión suya, y debe aportar lo correspondiente según el contenido de la sentencia.*

**Ahora bien, encuentra el Despacho que la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, llamado como garante, no intervino en la expedición de los actos administrativos que se demandan en este proceso y no tiene la obligación de reconocer ni pagar la pensión a la demandante, pues se constata que fue la UGPP, quien expidió los actos administrativos demandados, sin que exista**

---

<sup>3</sup> Mediante auto calendarado el 9 de agosto de 2017, expediente 110013335026201500789-00 – Demandante María Helena Amaya – Demandado UGPP

**injerencia alguna por parte del empleador en dichas decisiones. En efecto, el reconocimiento pensional esta en cabeza exclusivamente de la entidad de previsión social, en este caso la UGPP, y no en el ente empleador, así como también asumir el pago de los perjuicios derivados de los yerros jurídicos existentes en las liquidaciones pensionales que efectué, sin perjuicio del recobro a que haya lugar cuando exista incumplimiento de las obligaciones que están en cabeza del empleador.** (Negrilla y subraya fuera de texto)

Se concluye, que el objeto del llamamiento en garantía en el fondo corresponde a un ataque frente a una decisión autónoma de la autoridad nominadora, frente al pago de las cotizaciones, circunstancias estas que no son objeto del proceso, aceptar lo contrario implica desnaturalizar la Litis y el medio de control propuesto.

Finalmente, el Despacho acoge el criterio que adoptó el H. Consejo de Estado, en relación con la solicitud de llamamiento en garantía que fuera efectuada igualmente por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, y que se funda en argumentos jurídicos similares a los expuestos ante este Juzgado, que en lo pertinente, manifestó:

***“Del llamamiento en garantía.***

*En primer lugar, se hace necesario para el Despacho establecer que el llamamiento en garantía es una figura procesal que tiene por objeto exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que puede llegar a sufrir el demandado, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, la cual está prevista por el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA:*  
(...)

*El llamamiento en garantía procede cuando entre el llamado y el llamante existe una relación de garantía de orden real o personal, de la que surge la obligación, a cargo de aquél, de resarcir un perjuicio o de efectuar un pago que pudiera ser impuesto en la sentencia que decida el respectivo proceso<sup>4</sup>, relación que no se evidencia exista en el presente caso.*

*Previo a resolver el recurso de alzada, aclara el Despacho que si bien el A quo en el auto objeto de análisis, proferido el 7 de julio de 2014, decidió “rechazar” el*

*llamamiento en garantía solicitado por la entidad demandada, dicho rechazo se entiende, hace referencia a la negativa del Tribunal de acceder al llamamiento pretendido, toda vez que al proferirse la decisión el asunto se estudió de fondo.*

<sup>4</sup> Auto del 26 de septiembre de 2012, Expediente No. 05001-23-31-000-2001-02844-01 (1807-09) Actor: Ruth Elisa Londoño Rendón, M.P: Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

***Descendiendo al caso en concreto, considera el Despacho que en el sub judice, no hay responsabilidad por parte del Departamento de Boyacá- Secretaría de Educación de Boyacá frente a la obligación de reliquidar la pensión de jubilación del demandante, toda vez que no existe entre llamado y llamante una relación de garantía que le imponga a aquél el deber de responder por las obligaciones a cargo de la UGPP.***

***Sumado a lo expuesto, se aclara que la UGPP fue quien emitió los actos administrativos aquí acusados, de forma tal que de llegarse a ordenar en la sentencia del proceso el pago de lo pretendido, deberá responder por lo que se le reconozca y adeuda al demandante.***

***Todo lo anterior, sin perjuicio de que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, pueda ordenar los descuentos por concepto de aportes no efectuados durante el tiempo en que el señor Víctor Julio Quiroga González prestó sus servicios al Departamento de Boyacá- Secretaría de Educación de Boyacá.***<sup>5</sup> (Negrillas del Despacho)

Bajo los argumentos señalados, el Despacho negará el llamamiento en garantía y declarará no probada la excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario.

Por las razones expuestas, se

### **RESUELVE**

**PRIMERO. - DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN PREVIA DE FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO** y por ende, **NEGAR LA SOLICITUD DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP.

**SEGUNDO.** Se reconoce personería jurídica a la abogada JESSICA ALEJANDRA POVEDA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.075.664.334 y portadora de la tarjeta profesional No. 259.322 del

---

4 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION SEGUNDA. SUBSECCION B. Consejero Ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE. Bogotá D.C., ocho (8) de febrero del año dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00867-01(4120-14). Actor: VICTOR JULIO QUIROGA GONZÁLEZ. Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL- UGPP. Auto interlocutorio- Apelación.

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 11001-33-35-026-2019-00149  
C.S.J., de conformidad y para los efectos señalados en el poder de  
sustitución visible a folio 248.

**TERCERO.** Ejecutoriada la presente providencia, ingrese al Despacho para  
lo pertinente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

DPOV



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD  
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ORDINARIO** notifico  
a las partes la providencia anterior hoy **19 DE AGOSTO DE 2020**, a las ocho de  
la mañana (8:00 a.m.)

**LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA  
SECRETARIA**



**Firmado Por:**

**ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO**  
**JUEZ CIRCUITO**  
**JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-**  
**CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**0b0e6720dcd88148851686de33f851ef50302c9640dce1273f7410c299**  
**1f3f1c**

Documento generado en 18/08/2020 01:36:53 p.m.